



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0453/18

Referencia: Expediente núm. TC-05-2017-0221, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago contra la Sentencia de amparo núm. 110-2015, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago el diez (10) de julio de dos mil quince (2015).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución y, 9, 94 y 95 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011) dicta la siguiente sentencia:

I. ANTECEDENTES

Expediente núm. TC-05-2017-0221, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago contra la Sentencia de amparo núm. 110-2015, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago el diez (10) de julio de dos mil quince (2015).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional en materia de amparo

La Sentencia núm. 110-2015, fue dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago el diez (10) de julio de dos mil quince (2015). La misma acoge la acción de amparo interpuesta por el señor Sandy Eduardo Polanco Cirineo contra la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, cuyo dispositivo es el siguiente:

PRIMERO: En cuanto a la forma se acoge como bueno y válido el recurso constitucional de amparo, interpuesto por SANDY EDUARDO POLANCO, a través de su representante legal.

SEGUNDO: Se ordena a la Procuraduría Fiscal de Santiago, o cualquier institución pública, la apertura del Instituto de Adelgazamiento y Estética del Cuerpo (IDEAMEC), y la entrega del dominio del inmueble al señor SANDY EDUARDO POLANCO, quien ostenta la calidad de Gerente Designado, según la nómina de los socios, lo cual se comprueba en la documentación presentada como medio de prueba por los abogados constituidos del accionante.

TERCERO: Se ordena que la presente decisión sea ejecutoria sobre minuta.

CUARTO: Se exime de costas el recurso.

QUINTO: Se rechaza el astreinte solicitado por el representante legal del peticionante en amparo.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La presente sentencia fue notificada a la parte recurrente, Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, mediante copia certificada expedida por la Secretaría General de la Unidad de Citaciones y Notificaciones del Departamento Judicial de Santiago el cinco (5) de agosto de dos mil quince (2015).

2. Presentación del recurso de revisión constitucional en materia de amparo

La parte recurrente, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, apoderó a este tribunal constitucional de un recurso de revisión constitucional en materia de amparo, contra la sentencia anteriormente descrita, mediante escrito depositado en la Secretaría de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago el once (11) de agosto de dos mil quince (2015) y recibido por este tribunal el cuatro (4) de octubre del dos mil diecisiete (2017).

Dicho recurso fue notificado a la parte recurrida mediante acto sin número, instrumentado por la ministerial Germania Peña, alguacil ordinaria del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago el veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015).

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional en materia de amparo

La Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago acogió la acción de amparo, apoyándose, fundamentalmente, en los siguientes motivos:

a. Los peticionantes (sic) como fundamentos de sus pretensiones alegan que le han sido conculcados sus derechos constitucionales adjetivos tales el DERECHO A LA LIBERTAD DE EMPRESA, consagrado en el art. 50 de la Constitución, el DERECHO DE PROPIEDAD, consagrado en el art. 51 de la Constitución de la



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

República, DERECHO AL TRABAJO, art. 62 de la Constitución, y exponen que esos derechos han sido violados por en perjuicio del propietario SANDY EDUARDO PLANCO CIRINEO, quien es uno de los accionistas de IDEAMEC, vulnera flagrantemente el derecho de propiedad tutelado por la Constitución de la República Dominicana en su artículo 51, que establece: "El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes" Y el art. 62 que dispone, que el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Que no se ha probado de la Clínica de Adelgazamiento del Cuerpo y Estética (IDEAMEC, SRL), haya estado operando de manera ilegal y que no se ha comprobado que dicho cierre y actos de incautación fueran realizados en el amparo de una orden judicial competente. Que las violaciones mencionadas se pueden comprobar con los documentos que se describen, anexados a la instancia como prueba que fundamentan el recurso, dichas pruebas figuran descritas más arriba en esta decisión, en el acápite D de visto los autos y documentos.

b. En el caso de la especie los abogados representantes de la parte peticionante presentaron ante el plenario las pruebas que figuran descritas en la otra parte de la presente decisión, en especial en los antecedentes del caso, en su literal O, como hemos mencionado. La jueza procedió a analizar las mismas a fin de realizar una valoración y ponderación, para sustentar como hechos probados que, PRIMERO: se ordenó un secuestro y cierre del local de la Clínica de Adelgazamiento del Cuerpo y Estética (IDEAMAC, S.R.L), mediante auto No. 1343, dictado en fecha 21 de febrero del 2015 de la Atención Permanente de Santiago. SEGUNDO: Que la Clínica de Adelgazamiento del Cuerpo y Estética (IDEAMEC, S.R.L), cuyos socios son los señores SANDY EDUARDO CIRINEO, con 500 acciones, JUAN OSCAR POLANCO CIRINEO con 400 acciones y NIDIA MERCEDES LOPEZ BANK CON 100 acciones, TERCERO: Certificado de Registro Mercantil, emitido por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago Inc., a nombre de los socios



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

antes mencionados. CUARTO: Copias de la Licencia de Habilitación, por la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, donde se hace constar que IDEAMEC, cumple con las condiciones mínimas requeridas, por la ley general de Salud 42.01, en su art. 100 y art. 160 de la ley 187.01.

c. Luego de haber realizado la observación que antecede, este tribunal reconoce que está de acuerdo que deben investigarse los casos de violación de la Ley General de Salud 42-01 a fin de que no queden impune ninguna mala práctica médica que resultare fruto de estos ilícitos, y que sean traducidos a la acción de justicia los que resultaren identificados como presuntos culpables de dichos actos. Ahora bien en el caso de la presente acción de amparo, notamos que se trata de una empresa o negocio en la cual hay más de un accionista, según la documentación aportada, no solo la persona que está siendo investigada por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago hay más de un accionista, según la documentación aportada, no solo la persona que está siendo investigada por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, el ciudadano DR. JUAN OSCAR POLANCO CIRINEO. Como juzgadora me pregunto, que quiere decir o cómo debería aplicársele el principio de la personalidad de la persecución, presunción de inocencia de los demás socios, y el derecho consagrado en la constitución en su art. 50 sobre la libertad de Empresa, Sería bueno refrescar la memoria y recordar qué significa el "principio de la personalidad de la persecución o la pena; no es más que la obligación que tiene el Estado a través del órgano acusador / Ministerio Público), a los fines de que son la menor duda se juzgará a quien pretende imputar materialización de un hecho... en nuestro ordenamiento penal existe un principio de que nadie puede responder por el hecho de otro.

d. Siguiendo con la última idea del párrafo anterior de que en nuestro ordenamiento penal existe un principio de que "nadie puede responder por el hecho de otro", decimos esto porque tal como lo hemos expresado el negocio o empresa secuestrada la CLÍNICA DE ADELGAZAMIENTO DEL CUERPO Y



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ESTÉTICA (IDEAMEC, S.R.L., se trata de una sociedad que tiene la particularidad de pertenecer a dos hermanos y una socia, pero no obstante a ello solo uno de los socios está siendo investigado por la Fiscalía del Distrito Judicial de Santiago, DR. OSCAR POLANCO CISNERO, entonces yo me pregunto sobre el precepto constitucional establecido en el art. 50 sobre la Libertad de Empresa está demás? los demás socios, porque uno está siendo investigado deben perjudicarse su actividad comercial?, en nuestro país las actividades comerciales están regidas por la ley 479-08: qué nos dice la ley de referencia en su artículo 5, las sociedades comerciales gozarán de plena personalidad...Qué quiere decir eso? Que la personalidad jurídica de las sociedades de comercio es absolutamente independiente a la de sus accionistas. Así las cosas consideramos en ese sentido que el momento de aplicar las leyes e interpretar la Constitución debemos en el caso que así lo determine aplicar el principio de razonabilidad y como define este principio el Mag. Domingo Rafael Vázquez, en uno de sus escritos a Gaceta Judicial no. 276, año 13, cito: "Toda norma debe ser interpretada teniendo en cuenta, que cualquier limitación de un derecho que así resultare, debe ser adecuada, con relación a los fines útiles y legítimos perseguidos y lo menos perjudicial a ese derecho. El principio de razonabilidad, en orden a su función interpretativa comprende tres elementos que son: idoneidad, necesidad y proporcionalidad"; IDONEIDAD en el sentido, de que la limitación adecuada de todo derecho, debe ser con un fin útil y legítimo; NECESIDAD, esto es, que esa limitación sienta idónea ha de ser, lo menos perjudicial al derecho así limitado y PROPORCIONALIDAD, que es la exigencia de que esa limitación idónea y necesaria de ese derecho que así resultare, las ventajas que se obtengan sean superiores a los sacrificios en relación tanto con respecto a los individuos como a la colectividad. Este principio se ha de tomar muy en cuenta, cuando la norma a interpretar y sobre todo, a los fines de su aplicación implica, la presencia de derechos fundamentales..." Por todo lo expresado tanto en este párrafo como en los anteriores podemos apreciar que los reclamantes en amparo accionistas de los negocios cerrados de manera legal y arbitraria, están reclamando sus derechos



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

que constitucionalmente deben ser amparados no se ha demostrado ante el tribunal que los mismos estén siendo investigados o perseguidos por haber cometido algún ilícito penal.

e. En la presente acción de amparo observamos que el representante del Ministerio Público en sus conclusiones solicitan entre otras cosas. PRIMERO: Que sea declarada la inadmisibilidad de la presente acción de amparo en virtud del artículo 70 numerales 1 y 2 de la ley 137-11, en el sentido de que existen otras vías establecidas en el Código Procesal Penal en su art. 188 para decidir sobre dicho particular solicitado medida de amparo. Así como también han transcurrido más de 60 días para intimar dicha solicitud, dictada por el tribunal de instrucción Oficina de Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, al accionante en la medida de coerción; SEGUNDO: Solicitamos sea declarada inadmisibile en cuanto al formo y a la forma la presente solicitud de recurso de amparo incoada por el accionante SANDY EDUARDO POLANCO en el sentido de que el Ministerio Público ha utilizado la facultad constitucional que le confiere la misma procediendo a cerrar dicho lugar clínica IDEAMEC en el sentido de que dicha clínica el señor Oscar Polanco, hace procedimientos quirúrgicos sin estar facultado por la Sociedad Dominicana Reconstructiva y estética, la cual certifica que el señor Óscar Polanco no está facultado autorizado para realizar los procedimientos a los cuales se dedica en dicha clínica. Bajo reservas.

f. Consideramos que en los fundamentos jurídicos que figuran más arriba y que sustentan esta decisión hemos dado en parte respuesta a las conclusiones del Ministerio, no obstante a ello es un recurso especial, en el cual lo primero que debemos hacer es desligar dicho recurso de cualquier proceso en este caso penal, ya que la acción de amparo es principal, no secundaria; lo segundo es que debemos tomar en cuenta la efectividad del amparo y tercero, ponderar la titularidad de un derecho. En ese sentido es bueno observar, con relación a la interpretación que ha dado la representante del Ministerio Público en los artículo



República Dominicana **TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

citados en sus conclusiones, lo que dispone el art. 74 de la Constitución de la República Dominicana: "Principios de reglamentación e interpretación La Interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes: 1) No tiene carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza; 2) Sólo por ley, en los casos permitidos, por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad. 3). Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tiene jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado; 4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución". Vemos que los derechos y garantías fundamentales no tienen carácter limitativo y que los poderes públicos deben interpretar y aplicar las normas relativas a los derechos fundamentales, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos. En el caso de la especie a través de las pruebas aportadas podemos notar que el estado no ha brindado la protección que requiere los demás socios de la empresa secuestrada por el organismo encargado de llevar la investigación. Y repetimos de nuevo lo que nos dice el art. 50 sobre la LIBERTAD DE EMPRESA. El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes. Como Juez de amparo nuestro deber es verificar si ha sido violado algún derecho constitucional. Al órgano acusador es que le corresponde investigar los aspectos que considere de lugar a los fines de sustentar una acusación. Los jueces estamos para garantizar a todas las partes lo que es el debido proceso de ley, o



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

sea que los procedimientos se lleven a cabo como lo establecen nuestras normas legales.

g. Me permito citar al Magistrado Bernabé Moricete Fabián, experto en Derecho Constitucional, quien es una de sus ponencias dice "El amparo encuentra su justificación en la naturaleza misma de los bienes jurídicos que está llamado a tutelar pues se trata de derechos y prerrogativas constitucionalmente consagradas que, ante la sola amenaza de una conculcación injustificada o desproporcionada, hace al Estado compromisario en la puesta en movimiento de acciones, que libres de trabas irrazonables impidan o, en todo caso, restauren la dinámica funcionar del derecho en el cumplimiento de los fines para los que el derecho ha sido creado. De este modo y tomando en cuenta la urgente necesidad que entraña la garantía efectiva del derecho, no se supedita el ejercicio conocimiento y fallo del amparo a la preexistencia de ninguna acción "jurisdiccional previa.

h. La esencia de la presente acción constitucional de amparo consiste en que se ordene a la autoridad pública correspondiente, en este caso a la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago que ordene la apertura inmediata del establecimiento comercial CLÍNICA DE ADELGAZAMIENTO DEL CUERPO Y ESTÉTICA (IDEAMEC. S.R.L).

i. Conforme al artículo 88 de la Ley 137-11, citada, "la sentencia emitida por el juez podrá acoger la reclamación de amparo o desestimarla, según resulte pertinente, a partir de una adecuada instrucción del proceso y una valoración racional y lógica de los elementos de prueba sometidos al debate. En el texto de la decisión, el juez de amparo deberá explicar las razones por las cuales ha atribuido un terminado valor probatorio a los medios sometidos a su escrutinio, haciendo una apreciación objetiva y ponderada de los méritos de la solicitud de protección que le ha sido "implorada, en tal virtud y visto los motivos antes expuestos se procede a acoger el recurso de amparo decidiendo este tribunal como figura en el dispositivo de la presente sentencia.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4. Hechos y argumentos de la parte recurrente en revisión constitucional en materia de amparo

En su escrito de revisión la parte recurrente pretende que se ordene, de manera cautelar y provisional, la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida, hasta tanto se conozca el recurso de revisión del que ha sido apoderado; en cuanto al fondo, que se ordene su nulidad y dicte directamente la sentencia del caso, sobre la base de las comprobaciones de hecho y de derecho aportadas en el recurso, y en consecuencia, devuelva el proceso a la secretaría del tribunal que la dictó, a fin de que conozca nuevamente del amparo con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional. Para sustentar dichas pretensiones, expone, en síntesis, lo siguiente:

a. En ocasión de que la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago solicitó medida de coerción contra el imputado JUAN OSCAR POLANCO CIRINEO en fecha seis de marzo del dos mil quince, por haber sido acusado de los tipos penales de homicidio involuntario, usurpación de funciones y violación de la Ley General de Salud contemplados en los artículos 319, 258, 92, 94 y 156 numeral 7 de Ley 42-01 respectivamente, en perjuicio de las víctimas Ely Estephannie Peña Placencia y Sara de los Ángeles Martínez Rodríguez, ambas occisas en razón de que el referido médico les había practicado varias cirugías estéticas en el Instituto de Adelgazamiento y Estética del Cuerpo (IDEAMEC).

b. La muerte de la víctima ELY ESTEPHANIE PEÑA PLACENCIA se produjo el 16 de febrero del 2015, mientras que la de SARA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ tuvo lugar el 21 de febrero del 2015, ambas por presunta mala práctica médica, lo que trajo como consecuencia que el día 21 de febrero del 2015, mediante autorización marcada con el número 1343/2015 se dispuso el cierre del referido instituto.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

c. El ministerio público procedió a realizar una investigación del caso y en vía de consecuencia obtuvo en la referida clínica varias evidencias materiales con relación al proceso que se sigue. Así como se impuso una medida de coerción al acusado la cual consistió en prisión preventiva por un período de tres meses.

PRIMER MEDIO: VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

d. La decisión de amparo objeto del presente recurso violenta disposiciones de orden constitucional sobre el Debido Proceso de Ley y la Tutela Judicial Efectiva de la víctima, entendida ésta “como un derecho de salvaguarda judicial de los derechos legítimos”, establecidos en el Art. 69 de la Carta Magna y los artículos 1.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

e. La violación al debido proceso de ley se evidencia, con el rechazo de la juez a quo con la no citación de las víctimas indirectas en este caso los familiares o representantes legales de las occisas ELY ESTEPHANIE PEÑA PLACENCIA Y SARA DE LOS ANGES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, víctimas querellantes en el presente proceso y quienes están debidamente identificadas desde la interposición formal de querellas y la presentación de la solicitud de imposición de medida de coerción en contra del imputado JUAN OSCAR POLANCO CIRINEO.

f. Es que el derecho que tienen las víctimas a estar enteradas de todo lo que sucede con su proceso es un derecho irrenunciable y que consagra la igualdad entre las partes como elemento consustancial al debido proceso.

g. Como se observa en esa parte de la decisión, la juez a quo debe haber observado las disposiciones constitucionales según la cual “Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado” y también la tutela judicial efectiva de la víctima, para que este caso son los querellantes y/o los familiares de las víctimas



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

occisas ELY ESTEPANIE PEÑA PLACENCIA y SARA DE LOS ANGELES MARTINEZ RODRIGUEZ, pues indica haber verificado la presencia de las partes según el proceso penal vigente, lo cual no ocurrió en el caso de la especie, causando, así, un grave perjuicio a las partes

h. El debido proceso se violentó por la inobservancia de todos los tipos de plazos. Basta con señalar que en la audiencia del conocimiento de la acción constitucional de amparo se efectuó el 10/07/2015 y que no fue hasta el día 05/08/2018 que al Ministerio Público le fue notificada la decisión por el hecho del depósito por parte del Ministerio Público de una solicitud de Pronto Despacho.

SEGUNDO MEDIO: INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO, EN VIRTUD DE LA INOBSERVANCIA DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 70 DE LA LEY 137-11 Y POR SER NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE.

A. CAPACIDAD JURIDICA DEL ACCIONANTE EN AMPARO.

i. La instancia de recurso de amparo incoada por el Sr. SANDY EDUARDO POLANCO CRINEO e IDEAMEC S. R. L en contra de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago por intermedio de los abogados Licdos. Pantaleón Mieses Reynoso y Cesar Florentino Flores de fecha 25/06/2015 dirigida a la Juez Presidente del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago en atribuciones del Tribunal de Amparo, carece de fundamentos jurídicos en cuanto a la falta de calidad de la parte accionante, toda vez que el cierre de la razón social INSTITUTO DE ADELGAZAMIENTO Y ESTÉTICA DEL CUERPO (IDEAMED) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R.L), posee licencia de habilitación por parte de la SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL a nombre del Sr. JUAN OSCAR POLANCO CIRINEO como centro de internamiento ubicado en la Ave. República de Argentina No. 18, La



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Esmeralda del municipio y provincia Santiago, mediante el número de registro 022501010339 de fecha 02 de febrero del año 2010.

j. Que si bien es cierto que en el acta de la asamblea general constitutiva la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) "Instituto de Adelgazamiento y Estética del Cuerpo (IDEAMEC)", EDUARDO POLANCO CIRINEO como gerente y los señores JUAN OSCAR POLANCO CIRINEO Y NIDIA MERCEDES LÓPEZ BANKS aceptaron la designación y tomaron posesión de sus funciones en la indicada fecha, no menos cierto es que el último de estos socios con capacidad habilitante para practicar intervenciones quirúrgicas por su calidad de MEDICO de profesión lo es el Sr. JUAN OSCAR POLANCO CIRINEO.

k. Que de lo antes expuesto se comprueba que el Doctor JUAN OSCAR POLANCO CIRINEO ha comprometido su responsabilidad penal, según establece la resolución No. 280 emitida por la Oficina de Atención permanente del Distrito Judicial de Santiago de fecha de fecha 07 de marzo del 2015 la cual dicto PRISION PREVENTIVA POR TRES (03) MESES. Lo que en vía de consecuencia no se puede desvincular la persona física con la persona moral, por esta haber comprometido su responsabilidad, por lo que el auto marcado con el núm. 1343/2015 emitido por la Juez Clara Vargas en sus atribuciones del juez de la garantía más que autorizar el secuestro y cierre del local CLINICA DE ADELGAZAMIENTO Y ESTÉTICA DEL CUERPO (IDEAMEC) lo que procura, es en virtud de los artículos 188, 189 y 190 de la Ley 76 modificada por la Ley 10-15 del año 2015, es asegurar todas las diligencias de investigación consagradas en el Código Procesal Penal Dominicano y de manera especial las estipuladas en el artículo 274, 285, 286 y siguientes de la norma precitada.

l. ¿Quiénes con los accionistas de INSTITUTO DE ADELGAZADAMIENTO Y ESTETICA DEL CUERPO (IDEAMEC), SOCEIDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R.L)?



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

- *SANDY EDUARDO POLANCO CIRINEO es un simple estudiante hermano del doctor JUAN OSCAR POLANCO CRINEO (VER SIC).*
- *JUAN OSCAR POLANCO CIRINERO médico de profesión hermano de SANDY EDUARDO POLANCO CIRINEO (VER SIC)*
- *NIDIA MERCEDES LOPEZ BANKS es una simple estudiante y por demás socia minoritaria sin poder de decisión (VER SIC).*

B. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL QUE CONOCIO LA ACCION CONSTITUCIONAL DE AMPARO INCOADO POR EL CIUDADANO SANDY EDUARDO POLANCO CIRINEO E INDEAMEC S.R.L.

m. La Ley 137-11 sobre los procedimientos constitucionales establece claramente la competencia del juez de amparo en el artículo 72 por lo que a los fines de su admisibilidad o no tendrá que indefectiblemente revisar las causas de inadmisibilidad, a tal efecto el tribunal A-Quo actuó apartado del principio de legalidad y franca violación a la Ley 137-11 cuando inobservó las causas de inadmisibilidad establecida en el artículo 70, por lo que se puede comprobar lo siguiente:

Existen otras vías judiciales, para demandar la protección del supuesto derecho conculcado.

La reclamación no ha sido presentada dentro del plazo de los 60 días de la fecha que el agraviado ha tenido conocimiento de conculcación de derecho fundamental.

La petición de amparo resulta notoriamente improcedente.

n. De lo precedentemente expuesto se comprueba que no estaban dadas las tres circunstancias anteriores para que la parte accionante en amparo eligiera la vía procesal del juez de la instrucción o juez de la garantía según lo ha dispuesto en



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

múltiples sentencias el Tribunal Constitucional de la República Dominicana cuyas sentencias emitidas por esta alta corte le son vinculantes a todos los tribunales de la República. En ese tenemos con el número TC/0084/12. “ El juez de la instrucción cuenta con los mecanismos y los medios más adecuados para determinar la procedencia o improcedencia de la entrega o devolución de un bien mueble que ha sido incautado como cuerpo del delito. ” Criterio reiterado por las sentencias TC/0280/13, TC/0030/14, TC/0072/14, TC/0099/14, entre otras.

o. Que la juez Cecilia Inmaculada Badía Rosario, Juez Presidenta de la Cuarta Sala de la Cámara penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, se extralimitó en sus funciones al no revisar su competencia en razón de lo establecido en el art. 70 de la Ley 137-11, en razón de que con la emisión de la sentencia 11/2015 de 10/07/2015 no tomo en cuenta el auto no. 1343/2015 de fecha 21/02/2015 que AUTORIZA SECUESTRO Y CIERRE DEL LOCAL de la razón social INSTITUTO DE ADELGAZAMIENTO Y ESTETICA DEL CUERPO (IDEAMEC), SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SRL), donde la juez de la instrucción como juez de la garantía limita el derecho de propiedad en que están revestido los accionistas de la referida entidad, que cuyos accionistas son SANDY EDUARDO POLANCO CIRINEO, JUAN OSCAR POLANCO CIRINEO Y NIDIA MERCEDES LOPEZ BANKS. Al no revisar los plazos de la emisión del auto que autoriza SECUESTRO Y CIERRE DEL DICHO LOCAL, esta se coloca al margen de la ley toda vez que transcurrido el plazo de los 60 días establecidos en la Ley 137-11 está más que superado dicho plazo con más de 90 días, que la Juez A Quo inobservo (sic) los plazos de carácter constitucional y que a todas luces resultan ser perentorio para las partes, por lo que debió pronunciar la inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo incoada por el ciudadano SANDY EDUARDO POLANCO CIRINEO.

p. Que efectivamente el juez de amparo no puede extralimitar sus funciones al querer tutelar supuestos derechos fundamentales conculcados sin haber hecho un



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

examen minucioso de su competencia y de su capacidad jurisdiccional dentro del ámbito de la ley 137-11; por lo que tendrá que examinar la naturaleza del caso, el bien jurídico tutelado y los plazos establecidos por la ley, situación que inobservo (sic) el juez que conoció cuando de manera olímpica no reviso (sic) los plazos que anteriormente se ha hecho referencia en este recurso de revisión, ni tampoco ha examinado una cuestión que es de orden público, como lo es su competencia (...)”.

q. El Ministerio Público, reconoce el carácter ejecutorio sobre minuta, no obstante recurso de las sentencias rendidas en amparo; lo cual no solo puede ser suspendido de manera cautelar, ante la impugnación por vía recursiva de dicha decisión y mediante decisión de suspensión dictada por el Juez Presidente del Tribunal apoderado, en virtud del Art.54.8 de la Ley 137.11 a solicitud de parte afectada, siempre y cuando, la ejecución de dicha decisión pueda provocar un daño irreparable o irreversible de la parte recurrente.

r. En ese sentido, en el caso particular, por intermedio de esta misma instancia, entendemos necesario solicitar al Honorable Juez Presidente del Tribunal Constitucional, en el ejercicio de sus facultades, tener a bien ordenar de manera cautelar y provisional, la suspensión de la ejecución de la Sentencia marcada con el N. 110/2015, de fecha 10 de julio de 2015... hasta tanto el Tribunal Constitucional conozca y decida sobre el presente recurso de Revisión por el cual dicha sentencia es impugnada.

s. Ello, por tratarse de un decisión que todas luces contiene todos los vicios aludidos y, por ende habrá de ser anulada, especialmente, porque de ejecutarse, dando cumplimiento a su materialización, entrega o devolución de los bienes inmuebles descritos en el dispositivo de la sentencia impugnada se crearía un perjuicio irreparable a los intereses de las víctimas del caso de la especie y al derecho del Estado dominicano de proteger el principal bien jurídico de nuestra sociedad que es la vida, toda vez que exista un eminente riesgo de que más mujeres



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

jóvenes y productivas de nuestra sociedad mueran en manos de una supuesta clínica estética dirigida por un médico que inobserva las reglas mínimas en la materia y que cuyo único afán es producir dinero a costa de la integridad física de esas pacientes.

5. Hechos y argumentos de la parte recurrida en revisión constitucional en materia de amparo

La parte recurrida, Sandy Eduardo Polanco Cirineo, no presentó escrito de defensa pese a que, como hemos señalado, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo le fue notificado mediante acto sin número, instrumentado por Germania Peña, alguacil ordinaria del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago el veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015).

6. Pruebas documentales

Las pruebas documentales depositadas en el trámite del presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo son las siguientes:

1. Resolución núm. 280/ 2015, dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago el siete (7) de agosto de dos mil quince (2015), sobre medida de coerción impuesta al Sr. Juan Oscar Polanco Cirineo.
2. Auto de autorización de secuestro y cierre de local, núm. 1343/2015, emitido por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago el veintiuno (21) de febrero de dos mil quince (2015).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

3. Acta de la asamblea general constitutiva de la sociedad de responsabilidad limitada (SRL), “Instituto de Adelgazamiento y Estética del Cuerpo”, celebrada el veintiséis (26) de agosto de dos mil nueve (2009).
4. Auto núm. 369-205, instrumentado por el Ministerial Eracleo Germán, alguacil ordinario de la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago el veinticuatro (24) de junio de dos mil quince (2015), contentivo de intimación de entrega de inmueble.
5. Instancia contentiva de la acción de amparo interpuesta por el señor Sandy Polanco Cirineo el treinta (30) de julio de dos mil quince (2015).

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

7. Síntesis del conflicto

La acción de amparo se origina en ocasión del proceso penal seguido contra el señor Juan Oscar Polanco Cirineo, contra quien la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago inició una investigación por presunta violación de los tipos penales de homicidio involuntario y usurpación de funciones, previstos en los artículos 319 y 258 del Código Penal y los artículos 92, 94 y 156 numeral 7 de la Ley núm. 42-01, General de Salud, respectivamente, en perjuicio de Ely Estephane Peña Placencia y Sara de los Ángeles Martínez Rodríguez, ambas fallecidas, en razón de que el referido médico, según la recurrente, les había practicado cirugías estéticas en el Instituto de Adelgazamiento y Estética del Cuerpo (IDEAMEC) que les causaron la muerte.

A raíz del indicado proceso, el veintiuno (21) de febrero de dos mil quince (2015), la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de



República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Santiago dictó el Auto núm. 1343/2015, mediante el cual autorizó a la Procuraduría Fiscal de este distrito judicial al secuestro y cierre del Instituto de Adelgazamiento y Estética del Cuerpo (IDEAMEC).

El treinta (30) de julio de dos mil quince (2015), el señor Sandy Eduardo Polanco Cirineo, socio de dicho centro, accionó en amparo ante la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, con el fin de que se ordene a la Procuraduría Fiscal de Santiago la apertura y devolución del local que aloja el referido instituto, bajo el fundamento de que su cierre es violatorio del derecho de propiedad, el derecho al trabajo, a la libertad de empresa y el artículo 69 de la Constitución.

Al respecto, fue emitida la Sentencia de amparo núm. 110-2015, el diez (10) de julio de dos mil quince (2015), la cual acogió la acción y ordenó a la Procuraduría Fiscal de Santiago, o cualquier institución pública, la apertura del Instituto de Adelgazamiento y Estética del Cuerpo (IDEAMEC) y la entrega del dominio del inmueble al señor Sandy Eduardo Polanco Cirineo, quien ostenta la calidad de gerente designado, decisión ahora recurrida en revisión constitucional en materia de amparo y en suspensión de su ejecución de manera provisional.

8. Competencia

Este Tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que establecen los artículos 185.4 de la Constitución y, 9, 94 y 95 de la Ley núm. 137-11.

9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de amparo



República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Antes de analizar el fondo del presente caso es de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos por la Ley núm. 137-11, para lo cual este tribunal expone las siguientes consideraciones:

- a. Conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas las decisiones dictadas por el juez de amparo “pueden ser recurridas en revisión por ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las condiciones establecidas en esta ley”.
- b. En la misma línea el artículo 95 de la citada ley núm 137-11 dispone que en esta materia el recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco (5) días contados a partir de la fecha de su notificación.
- c. En relación con el cómputo previsto por el citado artículo 95, este colegiado ha establecido en su Sentencia TC/0080/12, del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), que el plazo es de cinco (5) días hábiles y que, además, es un plazo franco; es decir, que al momento de computarlo no se toman en consideración los días no laborables ni el día en que se realiza la notificación ni el día en que se produce el vencimiento del mismo.
- d. En ese sentido, la sentencia recurrida fue notificada a la parte recurrente, Procuraduría Fiscal de Santiago, el cinco (5) de agosto de dos mil quince (2015), mientras que el recurso de revisión contra la sentencia anteriormente descrita fue interpuesto el once (11) de agosto de dos mil quince (2015), es decir, cuando había transcurrido cuatro (4) días hábiles, por lo que fue presentado dentro del plazo legalmente previsto.
- e. Asimismo, es de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11, el cual



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

establece que la admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación y aplicación de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

f. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada sobre la que este tribunal se refirió en la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de que la misma se configuraba, en aquellos casos en que, entre otros:

1) (...) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

g. Luego de ponderar los documentos que forman el expediente, el Tribunal considera que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso es admisible y debe conocer su fondo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento de la especie permitirá continuar afianzando su criterio en relación a la aplicación del artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, sobre la existencia de otras vías judiciales que permitan, de manera efectiva, obtener la protección del derecho fundamental invocado.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de amparo

Para decidir el fondo del recurso de revisión el Tribunal Constitucional expone las siguientes consideraciones:

- a. La parte recurrente, Procuraduría Fiscal de Santiago, sostiene en el desarrollo de su escrito que la decisión de amparo objeto del presente recurso de revisión constitucional violenta disposiciones de orden constitucional sobre el debido proceso de ley y la tutela judicial efectiva de la víctima, entendida esta “como un derecho de salvaguarda judicial de los derechos legítimos” establecidos en el artículo 69 de la Carta Magna y los artículos 1.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
- b. Continúa argumentando la recurrente que la violación al debido proceso de ley se evidencia en el rechazo de la juez *a-quo* de la citación de las víctimas indirectas, en este caso, los familiares o representantes legales de las occisas Ely Estephannie Peña Placencia y Sara de los Ángeles Martínez Rodríguez, querellantes en el proceso, quienes están identificadas desde la interposición de las querellas y la solicitud de imposición de medida de coerción contra el imputado Juan Oscar Polanco Cirineo.
- c. La revisión de los documentos aportados al debate revelan que la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, apoderada de la acción de amparo promovida por el señor Sandy Eduardo Polanco Cirineo y *el Instituto de Adelgazamiento y Estética del Cuerpo (IDEAMEC)*, procedió a fijar audiencia para el día tres (3) de julio de 2015; que esta audiencia fue aplazada –a pedimento del Ministerio –para el día diez (10) de julio del mismo mes y año, para cumplir con la notificación a la parte accionada del auto que autoriza la acción y los pruebas que se pretendían hacer valer en el proceso.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

d. Este tribunal ha verificado que en las incidencias de las audiencias en las que se instruyó y decidió el amparo interpuesto contra la Procuraduría Fiscal de Santiago, no consta que Esta haya formulado pedimento relacionado con la citación y comparecencia a la audiencia de las víctimas y representantes legales de las hoy occisas, Ely Estephane Peña Placencia y Sara de los Ángeles Martínez Rodríguez, ni que el mismo haya sido rechazado por el indicado tribunal.

e. En ese sentido, este colegiado ha comprobado que la sentencia recurrida no resolvió ni rechazó el pedimento referido por la Procuraduría Fiscal de Santiago, por lo que en ese escenario no es posible advertir violación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva como afirma la recurrente, por lo que rechaza este aspecto del recurso sin necesidad de que conste en el dispositivo de esta decisión.

f. Asimismo, la recurrente plantea que el tribunal de amparo actuó apartado del principio de legalidad y en franca violación a la ley cuando inobservó las causas de inadmisibilidad establecidas en su artículo 70 de la Ley núm. 137-11, es decir, cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado, cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta (60) días y cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente.

g. Por su parte, la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, al momento de conocer el fondo del asunto, resolvió los medios de inadmisión planteados por la Procuraduría Fiscal de Santiago, decidiendo lo siguiente:

Consideramos que en los fundamentos jurídicos que figuran más arriba y que sustentan esta decisión hemos dado en parte respuesta a las conclusiones del Ministerio, no obstante a ello es un recurso especial, en el



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

cual lo primero que debemos hacer es desligar dicho recurso de cualquier proceso en este caso penal, ya que la acción de amparo es principal, no secundaria; lo segundo es que debemos tomar en cuenta la efectividad del amparo y tercero, ponderar la titularidad de un derecho. En ese sentido es bueno observar, con relación a la interpretación que ha dado la representante del Ministerio Público en los artículos citados en sus conclusiones, lo que dispone el art. 74 de la Constitución de la República Dominicana: “Principios de reglamentación e interpretación La Interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes: 1) No tiene carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza; 2) Sólo por ley, en los casos permitidos, por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad; 3. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tiene jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado; 4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución” (...).¹

h. Como se observa, el tribunal de amparo centró la argumentación en destacar la falta de efectos suspensivos que caracteriza el amparo frente al proceso penal, su efectividad y la titularidad del derecho fundamental invocado; sin embargo, no dio solución concreta a ninguno de los medios que le fueron propuestos, lo que revela la falta de fundamentación de la sentencia recurrida.

¹ Ver párrafo 11, página 9 de la sentencia recurrida.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

i. Con relación a lo planteado por la recurrente, el análisis de la sentencia objeto del presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo y las piezas que obran en el expediente permite comprobar que, ciertamente, el juez de amparo realizó una interpretación errónea al admitir la acción de amparo y ordenar la apertura y dominio de la entidad sobre dicho inmueble, sin tomar en cuenta los medios de inadmisión propuestos por la Procuraduría Fiscal de Santiago. En ese sentido, procede acoger el recurso, revocar la sentencia y pasar a decidir la acción conforme a la práctica que viene asumiendo este tribunal en la materia abordada.

j. En la especie procede que, en aplicación del principio de economía procesal, este tribunal constitucional se avoque a conocer de la presente acción de amparo, siguiendo el criterio establecido en el precedente fijado en las sentencias TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013); TC/0185/13, del once (11) de octubre de dos mil trece (2013); TC/0012/14, del catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), así como la TC/0127/14, del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), donde quedó establecido que:

El Tribunal Constitucional, en aplicación del principio de la autonomía procesal, el derecho a la acción de amparo y a la tutela judicial efectiva (artículos 72 y 69 de la Constitución), y los principios rectores del proceso constitucional antes descritos, debe conocer el fondo de la acción de amparo cuando revoque la sentencia recurrida

k. El caso que nos ocupa versa sobre la acción de amparo interpuesta por el señor Sandy Eduardo Polanco Cirineo, la cual tiene por finalidad que le sean restaurados sus derechos a la propiedad, al trabajo y a la libertad de empresa alegadamente vulnerados, en ocasión del cierre y secuestro del *Instituto de Adelgazamiento y Estética del Cuerpo (IDEAMEC)*, ordenado mediante auto emitido por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago el



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

veintiuno (21) de febrero de dos mil quince (2015), por entender que el mismo no se llevó a cabo siguiendo el debido proceso de ley.

l. Por su parte, la Procuraduría Fiscal de Santiago sostiene que en la especie concurren las causales previstas en el artículo 70 de la Ley núm. 137-11, pues existen otras vías judiciales establecidas por el artículo 188 del Código Procesal Penal, toda vez que la vía procesal lo era el juez la instrucción, según lo ha dispuesto en múltiples sentencias el Tribunal Constitucional, las cuales son vinculantes a todos los tribunales de la República (TC/0084/12, TC/0280/13, TC/0030/14, TC/0072/14 y TC/0099/14, entre otras); que el plazo de los sesenta (60) días está superado con más de noventa (90) días y finalmente, que la acción resulta notoriamente improcedente por querer tutelar supuestos derechos fundamentales conculcados sin haber hecho un examen minucioso de su competencia y de su capacidad jurisdiccional dentro del ámbito de la Ley núm. 137-11.

m. Dado el carácter perentorio de los medios propuestos por la accionada original, Procuraduría Fiscal de Santiago, este tribunal entiende pertinente iniciar el análisis de las cuestiones planteadas por dar respuestas a estos aspectos de la acción, y solo de ser necesario, entraría a resolver el fondo del asunto.

n. La doctrina de este colegiado ha venido señalando que la solicitud de devolución de objetos vinculados a una investigación penal debe producirse ante el juez de la instrucción por ser el funcionario llamado a resolver todas las cuestiones que ameriten la intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio, pudiendo dictar las resoluciones pertinentes en relación con las cuestiones que le son formuladas; de manera que el ordenamiento procesal penal cuenta con un juez habilitado para resolver las peticiones realizadas tanto por el Ministerio Público, encargado de dirigir la investigación, como las solicitudes de todas las partes envueltas en el proceso, según lo dispone el artículo 73 del Código Procesal Penal



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

[TC/0266/16, del veintisiete (27) de junio de dos mil dieciséis (2016), párrafo 11.4, página 24].

o. Este tribunal ha constatado que mediante el Auto de Autorización de Secuestro y Cierre de Local núm. 1343/2015, emitido por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago el veintiuno (21) de febrero de dos mil quince (2015), en funciones de juez de la instrucción, se autorizó a la Procuraduría Fiscal de Santiago proceder al secuestro y aseguramiento del negocio denominado *Instituto de Adelgazamiento y Estética del Cuerpo (IDEAMEC)*, ubicado en la calle República de Argentina esquina, núm. 18, sector Esmeralda, ciudad de Santiago.

p. Tal como se ha indicado en los antecedentes, la autorización de secuestro del local referido se produce en el curso del proceso de investigación iniciado por la Procuraduría Fiscal de Santiago, tras producirse la muerte de dos personas luego de serles practicados procedimientos quirúrgicos en el referido centro de salud, derivándose la imposición de medida de coerción de prisión preventiva contra el señor Juan Oscar Polanco Cirineo, por presunta violación a los artículos 319 y 258 del Código Penal y los artículos 92, 94 y 156 numeral 7 de la Ley núm. 42-01, General de Salud, respectivamente, según la Resolución núm. 280-15, dictada también por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago el siete (7) de marzo de dos mil quince (2015).

q. Este colegiado considera que, tratándose de un caso que tiene un proceso en curso ante la jurisdicción penal al momento de dictar el fallo, procedía declarar la inadmisibilidad de la acción, dada la existencia de otra vía judicial mediante la cual el accionante podía acudir con vista a la protección efectiva de los derechos que presuntamente les han sido vulnerados. Esta regla de aplicación tiene como fin evitar fallos contradictorios entre diferentes órganos jurisdiccionales, con relación a un mismo caso. En ese sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia de este tribunal



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

contenida en la Sentencia TC/0032/15, criterio que había sido adoptado en las sentencias TC/0041/12 y TC/0084/12.

r. Lo anteriormente implica que todas las solicitudes relativas a devoluciones de objetos secuestrados –no sujetos a decomiso –deberán ser requeridas ante la jurisdicción que se encuentra apoderada del conocimiento del proceso relacionado con el cierre del local. Es precisamente en ese proceso donde corresponde demostrar que sigue siendo útil – para la investigación– mantener el inmueble secuestrado, o de lo contrario, que el juez apoderado ordene su exclusión del proceso y en consecuencia, devolverlo a su propietario, de conformidad con el artículo 190 del Código Procesal Penal, el cual dispone textualmente lo siguiente: “[...]Tan pronto como se pueda prescindir de ellos, los objetos secuestrados que no estén sometidos a decomiso deben ser devueltos por el ministerio público a la persona de cuyo poder se obtuvieron [...] La decisión del ministerio público referida a la devolución puede ser objetada ante el juez...”

s. Resulta oportuno señalar por el tiempo que ha transcurrido desde que se inició el proceso [veintiuno (21) de febrero de dos mil quince (2015)], el juzgado de la instrucción no resultaría idóneo para adoptar la protección del derecho conculcado, por tanto este colegiado considera que en su lugar lo sería el tribunal de juicio o bien la jurisdicción que se encuentre apoderada del proceso penal seguido contra la persona imputada de los hechos punibles antes señalados, en atención a las disposiciones establecidas en el artículo 338 del Código Procesal Penal, el cual señala:

... La sentencia decide también sobre las costas con cargo a la parte vencida y sobre la entrega de los objetos secuestrados a quien tenga mejor derecho para poseerlos, sin perjuicio de los reclamos que correspondan ante los tribunales civiles. Decide además sobre el decomiso y la destrucción, previstos en la ley.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

t. Este criterio también fue desarrollado en la Sentencia TC/0261/2013, del diecisiete (17) de diciembre de dos mil trece (2013), literal g), página 14, donde este colegiado dispuso:

En tal sentido, lo que debió hacer el indicado tribunal fue declarar inadmisibile la acción de amparo, en el entendido de que correspondía al juez de la instrucción determinar la procedencia de la devolución del arma de fuego, en aplicación del artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, texto según el cual se entiende inadmisibile la acción “cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado.

u. Es por ello que en el presente caso procede declarar inadmisibile la acción de amparo al aplicar el artículo 70.1 de la referida ley núm. 137-11, por ser la jurisdicción penal que conoce el proceso la vía efectiva para adoptar las medidas necesarias y pertinentes respecto al bien inmueble secuestrado.

11. Sobre la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia

v. Resulta oportuno indicar que conjuntamente con el desarrollo de los motivos que sustentan el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, la parte recurrente ha solicitado, además, que previo al conocimiento del mismo se ordene, como medida cautelar, la suspensión de ejecución de la decisión recurrida hasta que se conozca el fondo del recurso.

w. Para este tribunal la solicitud de suspensión de ejecutoriedad provisional de la sentencia recurrida en revisión constitucional en materia de amparo carece de objeto, en vista de que la solución provista conduce a su inadmisión; por tanto, resulta innecesario su ponderación tal como ha sido apuntado en la Sentencia TC/0120/13, del cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013), criterio reiterado en las



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias TC/006/14, del catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014) y TC/0351/14, del veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014).

x. En tales circunstancias, este colegiado entiende que la solicitud de suspensión de ejecución provisional de la resolución recurrida está indisolublemente ligada a la suerte del recurso de revisión con el que coexiste, por lo que procede declarar su inadmisibilidad sin necesidad que conste en el dispositivo de esta decisión.

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta, Jottin Cury David y Katia Miguelina Jiménez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados Justo Pedro Castellanos Khoury y Víctor Joaquín Castellanos Pizano.

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago contra la Sentencia de amparo núm. 110-2015, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago el diez (10) de julio de dos mil quince (2015).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, **REVOCAR** la Sentencia de amparo núm. 110-2015, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago el diez (10) de julio de dos mil quince (2015).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TERCERO: DECLARAR inadmisible la acción de amparo interpuesta por Sandy Eduardo Polanco Cirineo contra la Procuraduría Fiscal de Santiago, por los motivos antes expuestos.

CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Procuraduría Fiscal de Santiago y, a la parte recurrida, Sandy Eduardo Polanco Cirineo.

QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, *in fine*, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11.

SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Samuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia, y coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercitamos la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución y, en tal sentido, presentamos nuestro voto particular, fundado en las razones que exponremos a continuación:



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. En la especie, contra la parte recurrente, Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, el señor Sandy Eduardo Polanco interpuso una acción de amparo, por violación a sus derechos fundamentales, que fue acogida mediante la sentencia objeto del presente recurso, en los términos siguientes:

“PRIMERO: En cuanto a la forma se acoge como bueno y válido el recurso constitucional de amparo, interpuesto por SANDY EDUARDO POLANCO, a través de su representante legal.

SEGUNDO: Se ordena a la Procuraduría Fiscal de Santiago, o cualquier institución pública, la apertura del Instituto de Adelgazamiento y Estética del Cuerpo (IDEAMEC), y la entrega del dominio del inmueble al señor SANDY EDUARDO POLANCO, quien ostenta la calidad de Gerente Designado, según la nómina de los socios, lo cual se comprueba en la documentación presentada como medio de prueba por los abogados constituidos del accionante.

TERCERO: Se ordena que la presente decisión sea ejecutoria sobre minuta.

CUARTO: Se exime de costas el recurso.

QUINTO: Se rechaza el astreinte solicitado por el representante legal del peticionante en amparo”.

2. La mayoría del Tribunal Constitucional decidió admitir el recurso por su especial trascendencia, revocar la sentencia impugnada y declarar la acción de amparo inadmisibles por considerar que existe otra vía judicial más efectiva.

3. Siendo coherentes con la postura que hemos venido asumiendo desde el año dos mil trece (2013), discrepamos de la posición fijada por la mayoría del Tribunal Constitucional, pues, si bien la acción de amparo es, en efecto, inadmisibles, lo es por



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ser notoriamente improcedente. A continuación, sin sacrificar la esencia de nuestro criterio, hacemos una síntesis de nuestra posición.

I. SOBRE LA ACCION DE AMPARO EN LA REPUBLICA DOMINICANA.

4. En torno a la acción de amparo en la República Dominicana, conviene precisar algunos de los elementos que la caracterizan (A), para luego detenernos en lo relativo a su admisibilidad (B).

A. Algunos elementos fundamentales sobre la acción de amparo.

5. La Constitución de la República, promulgada el 26 de enero de 2010, en su artículo 72, consagró el amparo en los términos siguientes:

Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el habeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.

Así, pues, en la actualidad, es desde el texto supremo que se aportan los elementos esenciales que caracterizan al régimen del amparo.

6. Posterior a la proclamación de la Constitución, se produjo la entrada en vigencia de la Ley No. 137-11 el 15 de junio de 2011, la cual, en su artículo 65, vino a regular el régimen del amparo en los términos siguientes:



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con excepción de los derechos protegidos por el habeas corpus y el habeas data.

2

7. Los derechos protegidos por el amparo son los derechos fundamentales, no otros; salvo en la situación excepcional de que no existiere “una vía procesal ordinaria para la protección de un derecho de rango legal que no es materialmente fundamental o no tiene conexidad con un derecho fundamental”³, situación en la que, “en virtud de los principios constitucionales de efectividad (artículo 68), tutela judicial efectiva (artículo 69) y favorabilidad (artículo 74.4), reconocidos también por la LOTCPC (artículos 7.1, 7.4 y 7.5)”⁴, el amparo devendrá, consecuentemente, en “la vía procesal más idónea para la tutela de dicho derecho”⁵. Por cierto que, como se aprecia, en esta última eventualidad carecería de sentido y utilidad cualquier discusión en torno a la inadmisibilidad de la acción de amparo.

8. La acción de amparo busca remediar –de la manera más completa y abarcadora posible– cualquier violación o amenaza de violación a los derechos fundamentales en perjuicio de una persona. Tal es –y no alguna otra– su finalidad esencial y definitoria; tal es su naturaleza. Como ha afirmado la Corte Constitucional de Colombia, su finalidad “es que el/la juez/a de tutela, previa verificación de la existencia de una vulneración o amenaza de un derecho fundamental, dé una orden para que el peligro no se concrete o la violación concluya”⁶.

² Este y todos los demás subrayados que aparecen en este voto, son nuestros.

³ Jorge Prats, Eduardo. *Comentarios a la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales*; IUS NOVUM, Editora Búho, Santo Domingo, segunda edición, 2013, p. 175.

⁴ *Ibíd.*

⁵ *Ibíd.*

⁶ Conforme la legislación colombiana.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

9. Es en tal sentido que se pronuncia el artículo 91 de la Ley No. 137-11, cuando establece:

La sentencia que concede el amparo se limitará a prescribir las medidas necesarias para la pronta y completa restauración del derecho fundamental conculcado al reclamante o para hacer cesar la amenaza a su pleno goce y ejercicio.

10. De esto último deriva la constatación de que el juez de amparo tiene un rol particular, específico, característico, que es, por cierto, sustancialmente diferente al que corresponde al juez ordinario; asunto este sobre el que volveremos más adelante.

B. Sobre la inadmisibilidad de la acción de amparo.

11. Como hemos dicho previamente, la acción de amparo se encuentra consagrada en los artículos 72, de la Constitución, y 65 de la Ley No. 137-11, ya citados. Dicha ley regula esta acción en todos sus detalles, uno de los cuales, especialmente relevante para el objeto de este voto, es el relativo a la facultad del juez de amparo para inadmitir la acción de la cual ha sido apoderado.

12. En efecto, el artículo 70 de la referida ley establece las causas de inadmisibilidad de la acción de amparo, en los términos siguientes:

El juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisibile la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguientes casos:

1) Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental.

3) Cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente.

13. A continuación, nos detendremos en el análisis de estas causales, no sin antes subrayar que, en todo caso, el Tribunal Constitucional ha conceptuado que la inadmisibilidad de la acción de amparo “*debe ser la excepción, siendo la admisibilidad la regla*”, como expresó en su sentencia TC/0197/13.

14. En cuanto a la causal número 2), esta, como es obvio, se resuelve con un cómputo matemático. Respecto de ella no hay discusión, salvo aquella suscitada en torno a la eventual naturaleza continua de la violación reclamada, asunto que impacta directamente en el cómputo del plazo. En efecto, animado del mejor espíritu garantista, el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC/0205/13, se ha referido a las violaciones continuas y al cómputo del plazo de la acción en los casos en que se está en presencia de tales violaciones. Ha dicho, en este sentido:

Las violaciones continuas son aquellas que se renuevan bien sea por el tiempo que transcurra sin que la misma sea subsanada o bien por las actuaciones sucesivas, en este caso por parte de la Administración Pública, que reiteran la violación. En estos casos, el plazo no se debe computar desde el momento en que inició la violación, sino que deben tomarse en cuenta las múltiples actuaciones realizadas por el afectado, procurando la reposición del derecho vulnerado, así como las repetidas negativas de la administración, las cuales renovaban la violación, convirtiéndola en continua.

15. Contrario a dicha causal, las otras dos –la existencia de otra vía judicial efectiva y la notoria improcedencia- son menos precisas, pues abarcan una amplia diversidad



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

de situaciones, lo que hace más complejo asir sus contenidos, sus objetos, sus alcances.

16. Entre ambas, más aun, existe una línea divisoria delgada y sutil que, con frecuencia, dificulta la identificación –precisa, objetiva- de cuál es la causal de inadmisibilidad que, en tal eventualidad –siempre excepcional, puesto que, como ya hemos dicho, en esta materia, la admisión es la regla y la inadmisión es la excepción-, procede aplicar en cada caso. En efecto, con más frecuencia de la deseable, la decisión de inadmitir una acción por existir otra vía judicial efectiva, pareciera que puede ser tomada, también e igualmente, por ser notoriamente improcedente; y viceversa. Es necesario, pues, un esfuerzo para clarificar y precisar dichas causales, de forma que las decisiones al respecto sean tomadas de la manera más objetiva posible, lo que, por supuesto, habrá que hacer siempre de forma casuística, atendiendo a las particularidades de cada caso.

17. En este sentido, conviene examinar y responder algunas preguntas; por ejemplo: ¿cuál es la naturaleza de la causal de inadmisibilidad relativa a la existencia de otra vía judicial efectiva?, ¿cómo determinarla?, ¿cómo aplicarla? Y, asimismo: ¿cuál es el significado y el sentido del concepto “*notoriamente improcedente*”?, ¿cómo se puede identificar dicha notoria improcedencia? Las respuestas a estas preguntas son fundamentales y es, pues, esencial precisarlas.

1. Sobre la causal de inadmisión por la existencia de otra vía judicial efectiva.

18. Con relación a esta causal, conviene recordar que la misma constituye una novedad aportada por la nueva Ley No. 137-11; inexistente, pues, en las normas que regularon el amparo previamente -ni en la Ley No. 437-06 ni en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de 1999- y, por tanto, desconocida en la doctrina y la jurisprudencia dominicanas.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

19. Así las cosas, resulta útil conocer cuál es la visión que, respecto de la noción de otra vía judicial efectiva, tiene la doctrina nacional e internacional.

a. La otra vía no ha de ser cualquiera, sino una más efectiva que el amparo

20. Una primera cuestión es la de que no debe tratarse de cualquier otra vía judicial, sino de una que sea efectiva. Al respecto, conviene recordar el criterio desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citado por este Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0030/12:

En lo que respecta a la existencia de otra vía eficaz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su primer caso contencioso, Velásquez Rodríguez contra Honduras, estableció los parámetros para determinar cuándo el recurso resulta adecuado y efectivo. En ese sentido, estableció: “Que sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida”. Esto para decir, que si bien “en todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos”, “no todos son aplicables en todas las circunstancias”. Por otro lado, “un recurso debe ser, además, eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido.”

21. Más aún, tanto la doctrina como la jurisprudencia han planteado que el asunto no se remite solamente a la determinación de si la otra vía judicial es efectiva o no, sino al establecimiento de que esa otra vía sea más efectiva que el amparo.

22. Ha dicho Sagués, en este sentido, que “[s]olamente si hay uno mejor que el amparo, es decir, más expeditivo o rápido, o más eficaz, el amparo no será viable. Si hay un proceso igual de útil que el amparo, el litigante es libre para emplear este o el otro camino procesal. En la última hipótesis, el amparo se perfila como vía



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

*alternativa u opcional para el agraviado.*⁷ Y, en otra parte, también ha precisado el maestro argentino, que

*No basta pues, que haya una vía procesal (de cualquier índole) para desestimar un pedido de amparo; hay que considerar, inexcusablemente, si tal trámite es auténticamente operativo para enfrentar el acto lesivo. Resultaría hartó fácil (y a la vez, farisaico), rechazar una demanda de amparo por la simple razón de existir acciones judiciales y administrativas que contemplaran el problema litigioso, pues con tal criterio, todo amparo resultaría prácticamente desechable. Lo que debe determinarse, es si tales caminos son efectivamente útiles para lograr ‘la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate’ (...).*⁸

23. Ha sido este, justamente, el criterio que ha fundado las decisiones de este Tribunal, el que, como dijo en sus sentencias TC/0182/13 y TC/0017/14, ha llegado a tales conclusiones *“luego de analizar la situación planteada en conexión con la otra vía llamada a brindar la protección que se demanda”*; o bien, como dice Sagüés y hemos citado poco antes, viendo, evaluando *“cuáles son los remedios judiciales existentes”*.

24. Así, en sus sentencias TC0021/12, TC/0182/13 y TC/0197/13 este colegiado ya había establecido de que *“en la especie no existía otra vía tan efectiva como la acción de amparo”, “la existencia de otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado”, no se trata de que “cualquier vía pueda satisfacer el mandato del legislador, sino que las mismas resulten idóneas a los fines de tutelar los derechos fundamentales alegadamente vulnerados”; y que la acción de amparo es admisible “siempre y cuando (...) no*

⁷ En: Jorge Prats, Eduardo. *Ibíd.*

⁸ Sagüés, Nestor Pedro. *Derecho procesal constitucional. Acción de Amparo*. En: Eto Cruz, Gerardo. *Tratado del proceso constitucional de amparo*; Gaceta jurídica, S.A., Editorial El búho, tomo I, Lima, Perú, primera edición, 2013, p. 530.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

existan vías más efectivas que permitan restaurar el goce de los derechos fundamentales que han sido alegadamente vulnerados en el caso particular.”

25. Y en términos parecidos se expresó en sus sentencias números TC/0083/12 y TC/0084/12, en las que concluyó en que el amparo, en vista de la sumariedad que caracteriza su procedimiento, no era una vía *“más efectiva que la ordinaria”*.

26. Como se aprecia, el criterio, por demás fundamental, de que, en todo caso, la causal de inadmisión de la acción de amparo por la existencia de otra vía judicial efectiva se ha de fundar en que esa otra vía sea más efectiva que el amparo, surgió temprano en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dominicano y se ha mantenido, acaso con mayor fuerza cada vez.

27. Por otra parte, y finalmente, es importante subrayar que la declaratoria de inadmisibilidad de la acción de amparo por existir otra vía judicial efectiva está condicionada no solo a que esa otra vía sea más efectiva que el amparo sino a que, además, se indique cual es esa otra vía y cuáles son las razones por las cuales ella es más efectiva. El Tribunal, en efecto, en su sentencia TC/0021/12, dejó claro que

el ejercicio de la mencionada facultad de inadmisión se encuentra condicionada a la identificación de la vía judicial que el tribunal considere idónea, así como de las razones por las cuales la misma reúne los elementos de eficacia requeridos por el legislador.

Y, asimismo, en su sentencia TC/0097/13, reiteró los términos de sus sentencias TC/0030/12, TC/0083/12, TC/0084/12 y TC/0098/12 y estableció que:

El juez de amparo tiene la obligación de indicar la vía que considera idónea, cuando entienda que la acción de amparo es inadmisibile, teniendo la responsabilidad de explicar los elementos que permitan establecer si la otra vía es o no eficaz.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

b. Criterios de inadmisión de la acción de amparo por la existencia de otra vía judicial más efectiva, identificables en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dominicano.

28. Procede, pues, que, en los párrafos que siguen precisemos cuáles son los criterios en base a los que este Tribunal ha determinado esa mayor efectividad y, consecuentemente, la derivación a la otra vía identificada en cada caso. En este sentido, el Tribunal ha establecido:

28.1. Criterios de afinidad entre el objeto del conflicto y la naturaleza de la otra vía.

28.1.1. A la **vía contencioso-administrativa** y así:

28.1.1.1. En su sentencia TC/0030/12 estableció que

como el conflicto concierne al pago de impuestos, la vía correcta no es la del juez de amparo, sino la consagrada en el Código Tributario y la ley 13-07. Ciertamente, tratándose de materia tributaria corresponde al tribunal instituido, según las referidas normativas, resolver las cuestiones que se susciten en dicha materia.

(...) Por otra parte, el procedimiento previsto para la acción de amparo es sumario, lo cual impide que una materia como la que nos ocupa pueda instruirse de manera más efectiva que la ordinaria. Corresponde, pues, al juez ordinario, y no el de amparo, establecer cuando procede el pago de impuestos.

28.1.2. A la **vía inmobiliaria**, como hizo:

Expediente núm. TC-05-2017-0221, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago contra la Sentencia de amparo núm. 110-2015, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago el diez (10) de julio de dos mil quince (2015).



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

28.1.2.1. En su sentencia número TC/0031/12, un asunto referente “*a la reclamación de entrega de un certificado de título supuestamente extraviado*”, en el que declaró “*que el recurrente tenía abierta la vía del Registro de Títulos de la jurisdicción donde radica el inmueble cuyo certificado de título se había perdido o extraviado para reclamar la expedición de un duplicado del mismo*”.

28.1.3. A la **vía civil**, como hizo:

28.1.3.1. En su sentencia TC/0244/13, al establecer

que el accionante en amparo debió apoderar a la jurisdicción civil de una demanda en distracción de bienes embargados, que es como denomina la doctrina la acción consagrada en el citado artículo 608⁹. Se trata de una materia que no puede ser decidida por el juez de amparo, en razón de que para determinar la procedencia de dicha demanda se hace necesario agotar procedimientos de prueba ajenos a esta jurisdicción, con la finalidad de establecer si el demandante es el propietario del bien reclamado.

28.1.4. A la **vía penal (del juez de instrucción)**, particularmente para la devolución de bienes diversos que constituían cuerpos de delitos en procesos penales en curso; como hizo:

28.1.4.1. En su sentencia TC/0084/12, en relación con la devolución de un bien incautado -en ese caso, un vehículo-, en virtud del artículo 190 del Código Procesal Penal ocasión en la que, además, afirmó que

⁹ Se refiere al Código de Procedimiento Civil.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

el Juez de la Instrucción cuenta con los mecanismos y los medios más adecuados para determinar la procedencia o improcedencia de la entrega o devolución de un bien mueble que ha sido incautado como cuerpo del delito. Es dicho juez, además, quien está en condiciones de dictar una decisión en un plazo razonable y que se corresponda con la naturaleza del caso. (...) Debemos destacar, por otra parte, que el juez de amparo no está en condiciones de determinar la procedencia o improcedencia de la pretensión del accionante, ya que tal decisión supone establecer si la investigación permitirá prescindir del secuestro del referido vehículo; aspecto penal que corresponde resolver a la jurisdicción especializada en la materia.

28.1.5. Como se aprecia, en los casos señalados en esta parte, además del criterio de afinidad entre el objeto del conflicto y la naturaleza de la otra vía judicial, se mezclan también elementos relativos a la dificultad –cuando no a la imposibilidad- del juez de amparo para administrar las pruebas del asunto que se ha puesto en sus manos, elementos estos últimos que constituyen otro de los criterios que hemos identificado entre los que fundan las decisiones de inadmisión de este colegiado por la causal de existir otra vía judicial efectiva: el criterio relativo a las limitaciones del juez de amparo para resolver algunos casos, que es el que expondremos a continuación. A pesar de la señalada mezcla, estos casos son expuestos en el marco de este criterio, en el entendido de que el mayor peso en la fundamentación de las respectivas decisiones hace más relación con este criterio que con el próximo.

28.2. Criterios relativos a las limitaciones del juez de amparo para resolver algunos casos.

28.2.1. En su sentencia TC/0083/12, mediante la cual derivó el asunto “*ante el juez de los referimientos o ante el juez apoderado del embargo*”, en el entendido de que “*el procedimiento de referimiento está previsto para resolver los casos urgentes, de*



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

manera tal que siguiendo el mismo existe la posibilidad de obtener resultados en un plazo razonable”.

28.3. Criterios relativos a la constatación de que el conflicto en cuestión ya está siendo llevado en la otra vía y, en tal sentido, ha señalado:

28.3.1. En su sentencia TC/0118/13, que *“la recurrente (...) ya ha interpuesto la acción idónea y correspondiente para remediar la alegada vulneración de sus derechos, esto es, la Demanda en Ejecución de Póliza de Seguros y Reparación de Daños y Perjuicios por incumplimiento contractual”.*

28.4. Criterios relativos a la posibilidad de que en la otra vía judicial puedan dictarse medidas cautelares y, en tal sentido, ha establecido, en su sentencia TC/0234/13, que *“uno de los elementos tomados en cuenta por el Tribunal Constitucional para determinar la existencia de otra vía eficaz consiste en la posibilidad de que [en ella] puedan dictarse medidas cautelares”.*

29. En fin que, en relación con la inadmisión de la acción de amparo por existir otra vía judicial efectiva, hemos identificado que el Tribunal ha establecido criterios relativos (i) a la afinidad entre el objeto del conflicto y la naturaleza de la otra vía, (ii) a las limitaciones del juez de amparo para resolver algunos casos, cuya solución implica auscultar el fondo de la cuestión, (iii) a la constatación de que el conflicto que contiene la acción de amparo ya está siendo llevado en la otra vía, y (iv) a la posibilidad de que en la otra vía puedan dictarse medidas cautelares.

2. Sobre la causal de inadmisión por ser notoriamente improcedente.

30. Respecto de la causal 3), conviene recordar que, contrario a la causal 1), ella era conocida en la doctrina nacional, toda vez que se encontraba consagrada en las normas que regularon el amparo previamente, es decir la Ley No. 437-06, del 30 de



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

noviembre de 2006, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia, del 24 de febrero de 1999, si bien en esta última usaba el concepto “*ostensiblemente improcedente*”. Tuvo, sin embargo, poco desarrollo doctrinal y jurisprudencial, por lo que, respecto de ella, el reto es parecido al que presenta el desarrollo de la noción contenida en la causal 1) para la doctrina y la jurisprudencia nacionales, en particular para el Tribunal Constitucional dominicano.

31. Notoriamente se refiere a una calidad que es manifiesta, clara, evidente, indudable, patente, obvia, cierta. De tal forma que aquello que tiene esa calidad no amerita discusión.

32. La improcedencia significa que algo no es procedente. Es la calidad “*de aquello que carece de fundamento jurídico adecuado, o que por contener errores o contradicciones con la razón, o haber sido presentado fuera de los plazos oportunos, no puede ser admitido o tramitado.*”¹⁰ Se trata de un concepto que tiene raigambre jurídico- procesal. En la especie, se refiere a una causal de inadmisibilidad prevista por la Ley No. 137-11, en relación con la acción de amparo. La inadmisibilidad, por su parte, constituye una “[c]ondición que tiene un trámite, una demanda, una acción u otro procedimiento judicial, que ha sido calificado como no viable por el funcionario o juzgador a cargo, por problemas de forma o fallas jurídicas”¹¹.

33. En la actualidad, la noción de notoriamente improcedente es vaga, abierta e imprecisa. Ella, sin embargo, se puede definir –y solo se puede definir, subrayamos– a la lectura de los artículos 72, de la Constitución, y 65, de la Ley No. 137-11.

34. En dichos textos se consagra la naturaleza de la acción de amparo, a la que, por su esencialidad respecto del contenido de este voto, nos referimos al inicio. En efecto, en la medida en que se define la naturaleza y el alcance de la acción de

¹⁰ *Diccionario hispanoamericano de Derecho*, tomo I A/K; Grupo Latino Editores, primera edición, 2008, Bogotá, p. 1062.

¹¹ *Diccionario hispanoamericano de Derecho*. Op. cit., p. 1071.



República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

amparo, también se define la improcedencia de la misma. Así, de su lectura se colige que, en la medida en que ella está destinada a la protección judicial de derechos fundamentales vulnerados o amenazados, cuando dicha acción se interpone con la finalidad de proteger otros derechos –derechos que no sean fundamentales; derechos subjetivos, cuya protección se garantiza adecuadamente mediante los procesos comunes por tratarse de un asunto de legalidad ordinaria-, es decir, derechos que no son fundamentales, esa acción ha de resultar, entonces, notoriamente improcedente.

35. De igual manera, cuando la acción de amparo se interpone con la finalidad de proteger derechos fundamentales como el de la libertad –protegido, según la ley, por el habeas corpus y excluido taxativamente por el referido artículo 72, constitucional, entre los derechos fundamentales cuya protección puede ser reclamada a través de la acción de amparo-, esa acción de amparo ha de resultar, entonces, notoriamente improcedente.

36. Asimismo, cuando la acción se plantea con la finalidad de proteger derechos fundamentales como el derecho a la autodeterminación o libertad informativa – protegido, según la ley, por el habeas data y excluido taxativamente por el referido artículo 65 de entre los derechos fundamentales cuya protección puede ser reclamada a través de la acción de amparo-, esa acción ha de ser considerada como notoriamente improcedente.

37. Y lo mismo ocurre cuando la acción de amparo procura el cumplimiento o ejecución de una sentencia, posibilidad esta que ha sido excluida por el referido artículo 72 pues el mismo solo se refiere a la posibilidad de *“hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo”*, esa acción ha de ser, también, notoriamente improcedente.

38. Se trata, como se aprecia, de situaciones procesales que, sin precisar análisis del fondo de la cuestión principal, escapan del ámbito de atribuciones del juez de amparo, por existir otros mecanismos legales claramente identificados por el



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

legislador para la efectiva tutela de los derechos involucrados y que, entonces, hacen al amparo manifiestamente improcedente y deben, por tanto, conducir a la inadmisión de la acción.

39. En todo caso, compartimos el criterio de que, como dice Jorge Prats, *“la inadmisibilidad del amparo por su notoria improcedencia debe aplicarse con suma cautela y prudencia, de modo que se declaren inadmisibles los amparos manifiestamente improcedentes.”*¹²

3. Nuestra visión sobre las causales 1) y 3) de inadmisión de la acción de amparo.

40. A continuación, plantearemos nuestra visión respecto de ambas; más específicamente, respecto del razonamiento que debe seguirse para determinar la una o la otra.

41. Una primera cuestión salta a la vista y es la de que ambas causales son excluyentes entre sí y, por tanto, el razonamiento para llegar a una debe ser diferente al razonamiento para llegar a la otra; o bien, que las razones que fundan la decisión en un sentido no pueden servir para fundar la decisión en el otro sentido.

42. Una segunda cuestión es que el análisis para determinar la existencia de otra vía judicial efectiva debe realizarse comparando la vía del amparo con esa otra vía. Como ya se ha dicho, habría que determinar la existencia de otra vía más efectiva que la del amparo, énfasis este que, como hemos pretendido evidenciar más arriba, no siempre se ha hecho al aplicar esta causal de inadmisión. En este sentido, hay que tener presente que la opción por otra vía judicial más efectiva ha de tomarse entre dos vías que son efectivas, que no en virtud de que el juez de amparo no posea la

¹² Jorge Prats, Eduardo. Op. cit., p. 195.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

atribución para conocer de la cuestión que se le ha planteado, no solo porque se desnaturaliza tal decisión, sino también porque, en tal escenario, lo pertinente sería, entonces, decidir la inadmisión de la acción por su notoria improcedencia.

43. Como ha afirmado Jorge Prats,

*[l]a clave radica en evaluar la notoria improcedencia de un amparo a partir del artículo 72 de la Constitución, el cual establece que se trata de una acción para la protección de derechos fundamentales, derechos que no se encuentran protegidos por el habeas corpus, que hayan sido vulnerados o amenazados y que dicha vulneración o amenaza sea consecuencia de la acción o la omisión de una autoridad pública o de un particular.*¹³

44. Los artículos 72 de la Constitución y 65 de la ley 137-11, consagran la naturaleza de la acción de amparo -su naturaleza, objeto y alcance- y, consecuentemente, su improcedencia.

45. De su lectura, en efecto, se colige que, cuando dicha acción se interpone con la finalidad (i) de proteger derechos que no sean fundamentales -derechos subjetivos, cuya protección se garantiza mediante los procesos comunes, regidos por la legalidad ordinaria-, (ii) de proteger derechos fundamentales como el de la libertad –protegido especialmente por el habeas corpus y excluido taxativamente por el referido artículo 72 del ámbito de la acción de amparo, (iii) de proteger derechos fundamentales como el de la autodeterminación informativa –protegido especialmente por el habeas data y excluido taxativamente por el artículo 65 del ámbito de la acción de amparo-, o (iv) de hacer cumplir o ejecutar una sentencia -lo que también ha sido excluido por el referido artículo 72-, esa acción no cumple con los presupuestos establecidos en el texto constitucional señalado y,

¹³ Jorge Prats, Eduardo. Op. Cit., p. 194.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

consecuentemente, debe ser declarada inadmisible por ser notoriamente improcedente, de conformidad con el artículo 70.3 de la Ley No. 137-11.

46. En todo caso, se trata, como se aprecia, de situaciones procesales que, sin precisar análisis del fondo de la cuestión principal, escapan del ámbito de atribuciones del juez de amparo, por existir otros mecanismos legales claramente identificados por el legislador para la efectiva tutela de los derechos involucrados y que, entonces, hacen al amparo manifiestamente improcedente y deben, por tanto, conducir a la inadmisión de la acción.

47. Una parte de la doctrina dominicana se refiere a este asunto y afirma que, por su lado, el artículo 65 de la Ley No. 137-11 establece lo que denomina como “*presupuestos esenciales de procedencia*”¹⁴, los cuales deben cumplirse para que la acción de amparo sea admisible.

48. Así, los referidos “*presupuestos esenciales de procedencia*”, todos contenidos en dicho artículo, serían los siguientes:

- a) Que se esté en presencia de una agresión a derechos fundamentales;
- b) Que dicha agresión se constituya por la existencia o la amenaza de una acción u omisión lesiva, proveniente de una autoridad pública o de un particular;
- c) Que sea patente la actualidad o la inminencia de la vulneración o amenaza;
- d) Que sea manifiesta la arbitrariedad o la ilegalidad de la vulneración o amenaza; y

¹⁴ Tena de Sosa, Félix; Polanco Santos, Yudelka. *El amparo como proceso subsidiario: crítica al voto disidente de la TC/0007/12*. En: *Crónica jurisprudencial dominicana*; Editora FINJUS; año I, número I; enero-marzo 2012; p. 33.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

e) Que exista la certeza respecto del derecho fundamental vulnerado o amenazado.¹⁵

49. Somos partícipes de que los recién señalados constituyen los “*presupuestos esenciales de procedencia*” de la acción de amparo, los cuales deben ser verificados cada vez, si bien a esos agregaríamos los siguientes:

- a) Que no se trate de proteger derechos fundamentales como el de la libertad –protegido especialmente por el habeas corpus y excluido taxativamente por el referido artículo 72 del ámbito de la acción de amparo;
- b) Que no se trate de proteger derechos fundamentales como el de la autodeterminación informativa –protegido especialmente por el habeas data y excluido taxativamente por el artículo 65 del ámbito de la acción de amparo-; y
- c) Que no se trate de hacer cumplir o ejecutar una sentencia, lo que también ha sido excluido por el referido artículo 72 del ámbito de la acción de amparo.

50. Así, la acreditación de dichos presupuestos constituyen “*un ‘primer filtro’ que debe sortear el amparista, por lo que en ausencia de cualquiera de éstos, la acción de amparo ‘resulta notoriamente improcedente’ conforme el artículo 70.3 de la LOTCPC*”; todo, sin perjuicio de que este “primer filtro” incluya, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia del artículo 44 de la Ley No. 834 –aplicada por este colegiado constitucional en virtud del principio de supletoriedad–, razones de inadmisión como las de “cosa juzgada”, “falta de objeto”, entre otras.

¹⁵ *Ibíd.*



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

51. Verificada la procedencia de la acción -porque cumple con los referidos presupuestos, todos contenidos en los artículos 72, constitucional, y 65, legal, ya citados- es que procede evaluar si esa acción –ya procedente- es o no igual o más efectiva que otra vía judicial.

52. No es posible, en efecto, que una acción de amparo que cumpla con los “*presupuestos esenciales de procedencia*” no sea efectiva para atender la petición que a través de ella formula el amparista. En otras palabras, al concluir que una acción de amparo cumple con los referidos “presupuestos esenciales de procedencia”, se estará concluyendo, al mismo tiempo, en que dicha acción resulta efectiva para atender el asunto contenido en ella; tal conclusión implicará “*automáticamente que el amparo constituye una vía efectiva para proteger el derecho alegadamente vulnerado o amenazado*”.¹⁶ Por tanto, en esas condiciones, la acción de amparo debe ser admitida. No tiene sentido, en efecto, el análisis de la efectividad de otra vía judicial, en comparación con la del amparo, si la acción de que se trata es improcedente.

53. De tal forma que, en efecto, solo después de verificada la procedencia de la acción, “*es que los jueces deberían ponderar la causa de inadmisibilidad relativa a la existencia de otras vías judiciales que permitan obtener de manera efectiva la protección del derecho fundamental invocado*”¹⁷.

54. En tal sentido,

[e]l establecimiento de la causa de inadmisibilidad relativa a la existencia de otras vías judiciales que permitan obtener la protección efectiva del derecho fundamental lesionado constituye una suerte de ‘segundo filtro’

¹⁶ Tena de Sosa, Félix; Polanco Santos, Yudelka. Op. Cit., p. 45.

¹⁷ Tena de Sosa, Félix; Polanco Santos, Yudelka. Op. cit., p. 33.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

para habilitar la procedencia del amparo, luego de que la evaluación de la pretensión del amparista haya superado el ‘primer filtro’.¹⁸

55. De manera que, en efecto, para determinar la admisibilidad de la acción de amparo, debe tomarse en cuenta y verificarse -así, en este orden específico—:

- a) Que la acción de amparo no esté prescrita (artículo 70.2 Ley No. 137-11);
- b) Que los referidos “presupuestos esenciales de procedencia” se cumplan (artículos 72, constitucional, y 65 y 70.3 de la Ley No. 137-11) y que, asimismo, no exista otra causa de inadmisibilidad de derecho común (artículo 44 de la Ley No. 834); y
- c) Finalmente, que no exista una vía judicial más efectiva para remediar la violación (artículo 70.1 de la Ley No. 137-11).

4. Sobre los roles del juez de amparo y del juez ordinario.

56. En el desarrollo que hacemos, es útil y conveniente enfatizar lo relativo a la agresión a derechos fundamentales como un presupuesto esencial de procedencia de la acción de amparo, si bien ello pudiera parecer obvio, y, en tal sentido, subrayar la verdadera naturaleza de la acción de amparo y, consecuentemente, su admisibilidad.

57. En este punto, conviene retener un asunto en particular: no toda violación a derechos lo es a derechos fundamentales y que, por eso mismo, no toda violación a derechos debe ser perseguida mediante una acción de amparo.

¹⁸ Tena de Sosa, Félix; Polanco Santos, Yudelka. Op. cit., p. 45.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

58. Resulta importante subrayar que, como hemos dicho reiteradamente en estas líneas, el amparo busca remediar y/o subsanar violaciones o amenazas a derechos fundamentales, de manera que la actuación del juez de amparo está limitada, conforme los términos del artículo 91 de la Ley No. 137-11, a “*prescribir las medidas necesarias para la pronta y completa restauración del derecho fundamental conculcado al reclamante o para hacer cesar la amenaza a su pleno goce y ejercicio*”.

59. En el mismo sentido, la doctrina española ha aclarado que el “*amparo judicial ordinario*”¹⁹ es un procedimiento preferente y sumario mediante el cual

*ha de perseguirse el cese de la situación contraria al derecho fundamental que impide al sujeto disfrutar de dicho derecho, impedir que la violación pueda producirse, así como reponer al titular lo antes posible en el ejercicio de su derecho fundamental. A esta intervención judicial la calificamos de “preclusiva” precisamente porque tiene como objetivo evitar que la violación se produzca, o poner fin de manera inmediata a la violación y porque genera, también de forma inmediata, la restitución en el disfrute del derecho fundamental violado.*²⁰

60. Como se aprecia, en la puntualización, por demás fundamental, de lo anterior toma relevancia la precisión de los roles que corresponden al juez ordinario y al juez de amparo, respectivamente, asunto sobre el que, en párrafos anteriores, habíamos advertido que volveríamos.

¹⁹ Se refiere al amparo previsto en el artículo 53.2 de la Constitución española, el cual establece: “*Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª. del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad...*”. Aparte, existe el “amparo constitucional” que, en nuestro caso, constituye el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales.

²⁰ Catalina Benavente, Ma Ángeles. *El Tribunal Supremo y la tutela de los derechos fundamentales. El recurso de casación y el art. 53.2 de la CE*; Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010, p. 55.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

61. En este sentido, es útil recordar que dichos roles son excluyentes, en aras de salvaguardar la integridad de sus respectivos ámbitos de actuación, evitando superposiciones y colisiones; de tal forma que el juez de amparo no debe conocer cuestiones que son atinentes a la *legalidad ordinaria* y que, como tales, deben ser resueltas por el juez ordinario a través de los condignos procedimientos judiciales establecidos al respecto por la ley.

62. Y es que, en la medida en que el papel del juez de amparo es reestablecer la lesión a derechos fundamentales, o impedir que la conculcación se produzca, función que no se extiende, tal cual lo afirma el Tribunal Constitucional español, a

[l]a mera interpretación y aplicación de las leyes, ni a la decisión de decidiendo conflictos intersubjetivos de intereses, subsumiendo los hechos en los supuestos jurídicos contemplados por las normas, con la determinación de las consecuencias que de tal operación lógico-jurídica se deriven y que en definitiva supongan la decisión de cuestiones de mera legalidad, las que pertenece decidir con exclusividad a los Jueces y Tribunales comunes²¹.

63. Así las cosas, el juez de amparo no puede tomarse el papel y las funciones de lo que por ley corresponde dirimir a los jueces ordinarios puesto que, en tal eventualidad, estaría contradiciendo su propia naturaleza y rol.

64. Se trata, en efecto, de “no convertir al amparo en un proceso en que se discutan materias ajenas a su ámbito de protección”²² y de tener presente, en todo caso, que, como ha dicho el Tribunal Constitucional peruano en unos párrafos que bien aplican a nuestra realidad, “[l]a experiencia jurisdiccional ha demostrado que el uso

²¹ Tribunal Constitucional Español. Auto ATC 773/1985 del 6 de noviembre de 1985.

²² Eto Cruz, Gerardo. *Tratado del proceso constitucional de amparo*. Op. cit., p. 515.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

indiscriminado e irrazonable de las acciones de garantía genera (...) la depreciación de la majestad de la justicia constitucional”²³.

65. Conviene ahora tratar, de manera específica, el presente caso.

II. SOBRE EL CASO PARTICULAR

66. Como hemos dicho, en la especie, inicialmente, la parte recurrente interpuso una acción de amparo por considerar que se violan sus derechos fundamentales.

67. El tribunal apoderado acogió la acción de amparo.

68. La mayoría del Tribunal Constitucional decidió admitir el recurso, revocar la sentencia de amparo, y declarar la acción inadmisibile por existir otra vía judicial más efectiva.

69. En el presente caso estamos de acuerdo en que, real y efectivamente, el juez de amparo no puede conocer la acción y que, por ende, esta debe ser declarada inadmisibile. No obstante, tal y como lo afirmamos previamente, no compartimos que dicha inadmisión sea en virtud de la existencia de otra vía efectiva, conforme los términos del artículo 70.1, sino por tratarse de una acción notoriamente improcedente, conforme los términos del artículo 70.3.

70. Ya hemos visto que, para aplicar la inadmisibilidat del artículo 70.1, debe hacerse un esfuerzo comparativo entre la acción de amparo y la otra acción judicial, a los fines de establecer cuál es más efectiva.

²³ STC Exp. No. 3283-2003-AA/TC. En: Eto Cruz, Gerardo. Op. cit., p. 516.



República Dominicana **TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

71. En la especie, la notoria improcedencia se deriva de la naturaleza misma de la cuestión que es, si se ausculta bien, impropia del ámbito del amparo y atinente a la legalidad ordinaria.

72. En realidad, la razón por la cual el Tribunal Constitucional entiende que el juez de amparo no puede conocer estas acciones es porque la jurisdicción penal es la idónea para proteger el derecho vulnerado. En efecto, no corresponde al juez de amparo el decidir respecto de la legalidad de un acto de naturaleza penal.

73. Esta *atribución de funciones* que hace el legislador, tiene una lógica innegable, ya que es la jurisdicción penal que tiene la responsabilidad de resolver una cuestión que se ha originado en ocasión de la puesta en movimiento de la acción penal. Esto se explica puesto que, en la procura de la mejor solución, se deberán tocar asuntos de fondo, lo cual requiere una atención específica, pormenorizada y profunda, del caso.

74. Y eso, que corresponde hacer al juez de lo penal, no puede hacerlo el juez de amparo, puesto que la acción de amparo, conforme explicamos, busca remediar violaciones, o amenazas de violaciones inmediatas e inminentes a derechos fundamentales, debiendo limitar su decisión a ese asunto central y definitorio, es decir, la eliminación de la vulneración, o de la amenaza de vulneración, a un derecho fundamental.

75. En fin, que, en la especie, lo que procedía era declarar la acción notoriamente improcedente, en virtud de que la cuestión tratada es relativa a la acción penal pública, y de que, por ende, no pasa el “*primer filtro*” de los referidos “*presupuestos esenciales de procedencia*”. En este caso, la acción no ha cumplido los “*presupuestos esenciales de procedencia*”.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

76. Pero afirmar, como ha hecho la mayoría, que la acción de amparo es inadmisibles por existir otra vía, implica que es procedente accionar en amparo para estos fines, pero que se trata de una vía menos efectiva que la ordinaria. Esta decisión deja, pues, abierta la posibilidad de que en casos como estos, el amparo pudiera ser admitido y, consecuentemente, conocido, es decir, que deja abierta la posibilidad de que, a través de acciones de amparo, se proceda a determinar y resolver cuestiones de naturaleza penal.

77. En definitiva, nuestra posición en el presente caso, es que la acción de amparo debió ser, en efecto, declarada inadmisibles, pero por ser una cuestión que no corresponde dirimir al juez de amparo, sino a los tribunales correspondientes del poder judicial.

Firmado: Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez

VOTO SALVADO DEL MAGISTADO
VICTOR JOAQUIN CASTELLANOS PIZANO

Con el mayor respeto, ejerciendo las facultades constitucionales y legales que nos incumben, nos permitimos discrepar de la sentencia precedente mediante la emisión de un voto particular. Nuestra disensión estriba en la errónea aplicación efectuada respecto del art. 70.1 de la Ley núm. 137-11 (existencia de otra vía efectiva), como causal de la inadmisión de la acción de amparo. Estimamos, en efecto, que el Pleno debió optar en la especie por el art. 70.3 de este último estatuto (notoria improcedencia).

Consideramos que no procedía la solución adoptada por el Pleno, en vista de la insatisfacción de los presupuestos de procedencia inherentes a la acción de amparo,



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

que se derivan del art. 72 constitucional y 65 de la Ley núm. 137-11²⁴. En este sentido, obsérvese que el presupuesto atinente a la naturaleza manifiestamente arbitraria o ilegal del acto u omisión impugnado no se verifica en la especie, en tanto concierne a un inmueble secuestrado con ocasión de un proceso penal. Además, tratándose de un conflicto que se está ventilando en la jurisdicción ordinaria, debió considerarse el criterio sentado por este mismo colegiado en múltiples decisiones previas²⁵, dictaminando la notoria improcedencia del amparo (art. 70.3 de la Ley núm. 137-11) cuando el caso se está conociendo en la jurisdicción ordinaria. Hemos planteado este criterio mediante numerosos votos anteriormente expedidos²⁶ a los cuales nos remitimos con relación a la especie.

Firmado: Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal Constitucional, que certifico.

Julio José Rojas Báez
Secretario

²⁴ A saber: el derecho supuestamente vulnerado al amparista debe ser de naturaleza fundamental; la acción de amparo debe producirse como consecuencia de un acto o de una omisión legalmente caracterizada que haya lesionado dicho derecho fundamental, y las partes involucradas deben gozar de legitimación para actuar en el proceso.

²⁵ TC/0074/14, TC/0313/14, TC/0350/15, TC/0438/15, TC/0455/15, TC/0328/15, TC/0424/16, TC/0171/17.

²⁶ En este sentido, pueden ser consultados los votos de nuestra autoría que figuran, entre otras, en las siguientes sentencias: TC/0095/15, TC/0101/15, TC/0109/15, TC/0141/15, TC/0173/15, TC/0174/15, TC/0187/15, TC/0230/15, TC/0236/15, TC/0274/15, TC/0275/15, TC/0291/15, TC/0300/15, TC/0316/15, TC/0323/15, TC/0326/15, TC/0327/15, TC/0368/15, TC/0374/15, TC/0382/15, TC/0385/15, TC/0395/15, TC/0413/15, TC/0419/15, TC/0568/16, TC/0553/16, TC/0568/16.